HALIMI, Gisèle. *Le procès de Burgos*
Santiago Oñate Laborde

212

del Socialismo y su concepto de Legalidad Socialista, y los derechos humanos en las naciones proletarias, en el ámbito geográfico que se encuentren y el concepto de desarrollo económico" (pág. 121).

La segunda parte de *La proyección internacional de los derechos humanos* plantea dos vertientes del más alto interés para la protección internacional de esos derechos: la gravísima situación creada a lo largo de las dos terceras partes de este siglo con respecto a los refugiados, y el lugar de los derechos humanos en la legislación internacional sobre las guerras. Se exponen todas las circunstancias de hecho y los antecedentes jurídicos que llevaron a la aprobación del Estatuto de los Refugiados en 1951, por una Conferencia de plenipotenciarios de las Naciones Unidas, como respuesta de la comunidad internacional frente a las oleadas recurrentes de grandes masas de seres humanos que se ven obligados a huir de sus países de origen, por consecuencia de persecuciones religiosas, raciales, políticas o de otra índole. La condición del refugiado ha sido una fuente de desconocimiento de sus derechos fundamentales, y la preocupación del Derecho internacional por garantizarlos constituye, desde principios de este siglo hasta nuestros días, un capítulo de indiscutible relevancia, como se advierte del examen metódico exteriorizado en esta obra.

La vida, la libertad, la propiedad y muchos otros derechos individuales sufren los más duros y bárbaros ataques, al desatarse una guerra internacional o un conflicto armado local. Las personas calificadas de civiles, los prisioneros de guerra, los combatientes y las prohibiciones relativas al uso de algunos medios bélicos, son áreas en que la legislación internacional ha tenido que instrumentar soluciones de protección para los derechos humanos, gravemente comprometidos por los conflictos armados de tan trágica realidad en nuestra época. Ese régimen, que los estudiosos denominan Derecho Humanitario, es el que el autor de la obra bajo estudio esclarece con evidente penetración y con detallado conocimiento.

Una tercera parte, de instrumentos jurídicos internacionales: la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; la Convención y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados; la Declaración sobre Asilo Territorial y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cierran y complementan el extenso y documentado panorama que este libro ofrece, y que es de lectura obligada y singularmente instructiva, tanto para profanos como para especialistas, en la esfera de la complicada problemática de los Derechos Humanos.

Humberto E. RICORD

HALIMI, Gisèle. *Le procès de Burgos*. (Préface de Jean Paul Sartre). Gallimard, "collection Témoins", 1971, xxx + 321 pp.

El jueves 3 de diciembre de 1970, en Burgos, se inició la vista del "Sumarísimo 31-69", proceso político entablado formalmente por el régimen fran-

quista en contra de dieciséis militantes de la organización separatista E.T.A. (Euskadi ta Askatasuna, "el país vasco y su libertad") acusados genéricamente del delito de "rebelión general continuada" establecido por el Decreto sobre rebelión militar, bandidaje y terrorismo de 21 de septiembre de 1960; proceso que, jurídicamente, culminó con la sentencia pronunciada el día 28 de diciembre de 1970 (en que se condena a la pena capital a seis de los acusados) y con el indulto y conmutación de la pena otorgado el día 30 del mismo mes.

El proceso de Burgos, al igual que todos los procesos denominados políticos (entendiendo por tales aquellos que políticamente representan, dentro de moldes jurídicos especiales, el enfrentamiento de un orden nuevo generalmente de tipo revolucionario frente al orden jurídico, legítimo o ilegítimo, y que, jurídicamente, se caracterizan por los principios de la "autodefensa estatal"), es susceptible de varios tipos de examen. Los procesos políticos pueden ser analizados desde un ángulo ideológico de tipo partidario que no tome en consideración la forma jurídica que dichos procesos adoptan; o bien pueden ser considerados, aunque este tipo de análisis es menos frecuente, desde un ángulo "puramente" jurídico, es decir, dejando de lado toda consideración de orden político. Es evidente que ninguno de los dos métodos antes esbozados es capaz de dar una visión completa del fenómeno en virtud de la naturaleza político-jurídica del mismo.

Le procès de Burgos de Gisèle Halimi, presenta con maestría poco usual ambos aspectos del problema. Describe claramente la gestión extrajudicial del "tema decidendum" dentro de un contexto sociológico-político y explica el desenvolvimiento jurídico de la causa presentando numerosos documentos judiciales integrantes del proceso.

Gisèle Halimi, abogada parisina, defensora de numerosos reos políticos del Tercer Mundo (entre ellos se encuentran Dajami lo Boupacha y Mehdi Ben Barka), asistió como observadora al proceso de Burgos representando a la Federación Internacional de Derechos del Hombre.

En el libro que se reseña, encontramos la cronología de la vista de la causa realizada por el Consejo de Guerra —autoridad judicial militar que funciona como órgano de jurisdicción mixto o de escabinos; competente para conocer de la causa en virtud del artículo 8º del Decreto sobre rebelión militar, bandidaje y terrorismo de 21 de septiembre de 1960 y que se encuentra regulado, en su organización y en su funcionamiento, por el Código de Justicia Militar—, vista que se realizó a lo largo de la primera semana de diciembre de 1970 de acuerdo con las formalidades propias del procedimiento sumarísimo, procedimiento establecido por el Código de Justicia Militar, y que consiste en un procedimiento abreviado en el que las garantías y medios de defensa se ven limitados, forzosamente, por el principio rector de dicho procedimiento, a saber, la rapidez en el enjuiciamiento y, dado el supuesto, en la ejecución de la pena, de dicho principio deriva también la inapelabilidad del fallo por parte del acusado.

A continuación de la narración de la vista de la causa se comentan los sucesos que procedieron al pronunciamiento del veredicto dictado por el Consejo de Guerra el 28 de diciembre. Como elementos tendientes a la comprensión política del proceso, Gisèle Halimi examina las actitudes adoptadas

por los sentenciados y la posición ideológica de la E.T.A.; igualmente se examinan las reacciones de la opinión pública internacional frente al proceso de Burgos, dicha tarea la realiza mediante la presentación de una selección de material hemerográfico proveniente de dieciocho países de los cinco continentes (vergibracia: Francia, Argelia, Cuba, México, E.E.U.U., Gran Bretaña, Ciudad del Vaticano, U.R.S.S., etcétera). La última sección del libro que se comenta contiene los documentos jurídicos indispensables para un ulterior estudio del proceso de Burgos, ya que contiene el Acta de Acusación formulada por el Ministerio Público; un breve estudio sobre los tribunales de excepción y el decreto de 21 de septiembre de 1960, estudio debido a la pluma del abogado catalán don Juan Ignacio Sardá Anton, observador del proceso; extractos de los escritos de los abogados defensores, escritos que vienen a confirmar la valentía con que se conducen algunos letrados españoles en casos de esta naturaleza; igualmente, se consignan extractos de la sentencia de 28 de diciembre de 1970 en donde se encuadra la ideología de la E.T.A., dentro de los tipos delictivos prescritos por el Decreto de 21 de septiembre de 1960, sentencia que se funda en numerosos textos propagandísticos y programáticos de la citada organización separatista vasca.

En suma, consideramos que el libro que se comenta constituye una valiosa aportación para el estudio del proceso de Burgos, tema inquietante para el jurista por haber puesto en el terreno de la discusión jurídica la posición de choque que se produce, cada día con mayor intensidad, entre el poder del Estado frente al poder de grupos revolucionarios. Del mismo modo, la obra de Gisèle Halimi, constituye, para el procesalista, un punto de referencia ineludible en la ya larga historia de las causas políticas.

Santiago OÑATE LABORDE

HERRERA, Alexis J. *Disolución y liquidación de sociedades mercantiles*. Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Panamá, 1969, 180 pp.

J. Herrera nos señala que la disolución de las sociedades mercantiles tiene sus precedentes en los siguientes documentos:

- a) Las copias del Código de Hammurabi, en los años 668-626 a. C.
- b) En el derecho romano; en éste se conocieron ciertas asociaciones privadas que fueron muy personalistas, que carecieron de capacidad patrimonial y que tuvieron como causas de disolución las siguientes: 1. La conclusión del término fijado; 2. La pérdida del fondo social o el fin de las operaciones de la sociedad; 3. La muerte de uno de los asociados (*intuitu personae*); 4. La *capitis diminutio* máxima y media; 5. La voluntad concordante de los socios, y 6. La renuncia de uno de los asociados.
- c) En las siete partidas, concretamente en la partida quinta, título X, leyes de la X a la XIV, éstas señalaban como causas de disolución las